

11. Administración de la Seguridad

11.1. Actuación de la Policía

Tipos de reclamos

Se recibieron reclamos y consultas que dieron origen a la formación de 43 expedientes relacionados con el accionar de la Policía Provincial. De ellos, 21 corresponden a violencia policial contra ciudadanos, y 23 a denuncias relacionadas con problemas vecinales y desmanes realizados por jóvenes, quejas por procedimientos policiales y problemas administrativos en la misma fuerza (solicitudes de reincorporación, reclamos por cobro de adicionales, etc.).

En el lapso abarcado por el presente informe, comparándolas con igual período del 2002, han disminuido las denuncias por violencia y malos tratos. En todos los casos la fuerza policial ha informado sobre la existencia de causas judiciales por apremios promovidas ante los tribunales penales competentes.

Si bien la Defensoría del Pueblo debe suspender su actuación cuando se encontrare pendiente la resolución de acciones judiciales (art. 16 inc. c, ley 2.756), hemos realizado el control del cumplimiento de las obligaciones administrativas de investigación interna en los casos donde se ha denunciado al personal policial por apremios, observándose que la fuerza policial labró en todos los casos dichas actuaciones – sumarios-, aún cuando éstas, también son suspendidas hasta la resolución de la acción penal promovida por particulares.

Cabe destacar, una vez más, que desde la Jefatura de la Policía de Río Negro, siempre se ha prestado colaboración con la Defensoría del Pueblo, respondiendo a todos y cada uno de los traslados efectuados en tiempo y forma.

Donde sí se ha observado cierta demora, es en la tramitación de recursos administrativos planteados por personal de la policía, y si bien en algunos casos es responsabilidad de la propia fuerza, en otros casos, la dilación en resolverse el trámite de los mismos se opera en la instancia de los recursos de apelación o jerárquicos ante el Ministerio de Gobierno o el propio Poder Ejecutivo.

Señalamos que los ciudadanos notificados de las respuestas brindadas por los organismos involucrados en sus quejas no suelen efectuar consideraciones, lo que demuestra conformidad – o desinterés- en el desarrollo de la investigación. Ello no obsta a la continuidad de las actuaciones si la Defensoría del Pueblo estima oportuno formular recomendaciones de tipo general, a partir de una situación individual planteada.

También pusimos en conocimiento de las Comisiones Legislativas de Seguridad y de Derechos Humanos de la Legislatura muchas de las denuncias presentadas contra las fuerzas de seguridad provinciales.

Actuaciones de oficio

Cinco han sido las actuaciones instadas De oficio por la Defensoría del Pueblo sobre la temática de la seguridad o actuación policial.

Entre ellas, destacamos el Expte. N° 3.337/03 iniciado a partir de informes periodísticos que daban cuenta del **mal estado del parque automotor de la Policía de la Provincia**. Del informe rendido por ésta, se desprende la falta de mantenimiento de los vehículos por cuestiones meramente presupuestarias, sosteniéndose tales erogaciones a veces sólo con la colaboración de las cooperadoras policiales. A la fecha del mentado informe, se indicó que la última adquisición de móviles se había producido en el año 2.000.

Recientemente, se ha llamado a licitación para adquirir 8 unidades nuevas con recursos propios de la fuerza y existen proyectos de renovación de la planta automotriz para el año próximo, situación que se pone de manifiesto en el presupuesto 2.004 elaborado para la institución.

Otra situación de tipo colectivo en la que intervinimos **De Oficio** - Expte. 2820/03 - fue la denuncia de **violencia policial en Lamarque**. Durante la tramitación del expediente, se realizaron reuniones con los pobladores y autoridades locales, de las que participó personal de esta Defensoría, interiorizándose en el lugar de la problemática planteada. Realizados los traslados de ley a la Policía de Río Negro y a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, se supo que se habían promovido actuaciones preliminares internas, sin perjuicio de las acciones penales incoadas por particulares.

Creación del Departamento de Derechos Humanos y del Escalafón Penitenciario

Se debe destacar la creación del Departamento de Derechos Humanos como parte de la estructura administrativa de la Jefatura de Policía Policial. Dicha oficina se encargará de la toma de conocimiento y de la intervención ante denuncias por violación a los derechos humanos, así como la capacitación de los miembros de la fuerza.

Por otra parte valoramos la creación por Decreto 1.116/03 del Escalafón Penitenciario en el ámbito de la Policía de Río Negro, el que quedó inserto en el Agrupamiento Seguridad. La norma legal resalta, tal como lo venía señalando la Defensoría del Pueblo, la necesidad de diferenciar las funciones de seguridad con la de custodia de los detenidos. Los que reciban formación en tareas penitenciarias, más aquellos que ya las desempeñaban, se unirán en este escalafón con el que se tiende a perfeccionar el servicio del personal afectado a la custodia de personas en las unidades carcelarias.

Las medidas descriptas crean una gran expectativa en lo referente a la disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y a malos tratos en la detención de ciudadanos.

11.2. Condiciones de detención en cárceles y comisarías

Introducción

Un informe de octubre pasado elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostuvo que “ las condiciones de hacinamiento en las comisarías y prisiones argentinas son peores que las de varios países con gobiernos no democráticos” y lapidariamente agregaba “ hay presos que hace meses no ven el sol, ni han hablado con un abogado o un magistrado”(Diario Río Negro, edición del 2 de octubre del 2003)

Llamó la atención de los funcionarios de la ONU que inspeccionaron once lugares de detención, que estas dramáticas condiciones correspondan a un país con una sociedad civil tan movilizadora y conciente de los derechos humanos. Se diagnosticó además, que más allá de la buena voluntad del gobierno y de las claras señales de avance en la política interna sobre derechos humanos, poco puede hacerse en el corto plazo.

Río Negro no es ajena a la emergencia penitenciaria nacional, y el colapso de las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal repercute en nuestro propio sistema ya que escasos son los cupos para trasladar los condenados hoy alojados en nuestras alcaidías. También se han agregado recientemente, quejas sobre las condiciones de detención en Comisarías, las que en ocasiones están superpobladas.

Nuestra Constitución Provincial y Nacional y los Tratados y Convenciones Internacionales incorporadas a nuestra Carta Magna por la reforma de 1994, consagran los derechos de las personas privadas de su libertad. La realidad demuestra la ineficacia de nuestro sistema carcelario como instancia de rehabilitación y convierten a nuestras cárceles en simples depósitos de personas sin otro destino que la marginalidad.

En el último informe anual expusimos nuestras propias impresiones luego de haber visitado en varias oportunidades las cárceles de Gral. Roca y San Carlos de Bariloche. No mucho ha cambiado desde entonces en punto a la falta de capacidad de los edificios para contener la población de internos, si bien se inauguraron en el presente obras de ampliación en esas unidades que permitieron la reubicación de los detenidos conforme a la situación de sus condenas o tipo de delitos y el género.

Así en Gral. Roca se realizaron las siguientes mejoras: cinco celdas nuevas y refracción integral de la instalación de gas, construcción de nuevo pabellón femenino, pabellón para internos transitorios, refacciones en Pabellón 6, 7 y femenino existente, provisión de gas natural en instalaciones de la ex escuela EMETA.

Mientras que en San Carlos de Bariloche se ejecutó la refacción integral del Pabellón de Autodisciplina y su ampliación (también sanitarios), mejoras en dos celdas linderas a éste último y calefacción para esos espacios. Por otra parte se habilitaron lugares para detenidos en la Escuela de Policía y se informó que se prevé para el año 2004 el inicio de obras para una nueva cárcel en la localidad andina.

Por su parte, la esperada obra de la nueva unidad carcelaria en Viedma, que permitirá descomprimir la superpoblación del resto, sufrió una importante demora en los plazos previstos en razón de la necesidad de modificación del sistema de fundación inicialmente proyectado. A la fecha está ejecutada en un 20% aproximadamente.

Finalmente, queremos dejar expreso que no existen por parte de los detenidos cuestionamientos hacia el personal policial que presta tareas en las cárceles, el que se esfuerza por mantener vínculos de respeto y consideración con los internos, mostrando una gran sensibilidad ante la situación de hacinamiento, indignidad y natural malestar en que éstos viven.

Actuaciones de oficio

Actuamos **De Oficio** ante los pedidos de los **internos de la Alcaidía de San Carlos de Bariloche**, difundidos en un medio periodístico local, para que se diera solución a cuestiones urgentes tales como: provisión de camas, mecheros, colocación de vidrios, servicio telefónico, asistencia médica, psicológica y odontológica. Con distintos plazos se fueron cumpliendo parcialmente los requerimientos, pues supeditaban la respuesta a algunas de esas demandas a la conclusión de la obra en marcha.

La Secretaría de Estado de Seguridad sí respondió inmediatamente la solicitud de atención sanitaria, informándose que la misma se cubría con enfermeros y médicos policiales, mientras que otros casos se derivaban al Hospital local, sin embargo, no consideramos superado este tema y se encuentran pendientes otros informes complementarios.

Otra intervención **De Oficio** fue la motivada en el **desabastecimiento de carne en la Alcaidía de Gral. Roca**, debido a que los proveedores reclamaban el pago de deudas que mantenía el Estado Provincial con ellos. Los internos entonces, comían menudos de pollo como único aporte de proteínas.

De los informes obtenidos del Director de esa Unidad y de la propia Dirección de Logística de la Jefatura de la Policía, surge:

- Que el presupuesto de \$50.000 mensuales asignado para la Cárcel es insuficiente, dado que se afectan idéntica suma para todas las unidades, sin considerar la población que contienen.
- Que dichos fondos se destinan a compra de comida, medicamentos y gastos de mantenimiento (los servicios tarifados los paga la Jefatura)

Concluimos que la Jefatura de la Policía, que establece la distribución del presupuesto general, debería evaluar los porcentajes afectados a la “custodia de detenidos” (sic) conforme las necesidades de cada Unidad. En tal inteligencia, la Defensoría del Pueblo está realizando consultas a los jefes de las distintas unidades, a fin de fundar nuestra resolución final.

Denuncias individuales

También recibimos reclamos individuales que omitimos detallar en extenso, en atención a la reiteración de las temáticas, muchas de ellas abarcadas en las actuaciones de oficio. Señalamos sólo dos:

La primera se refiere al pedido de los detenidos de **la alcaidía de Choele Choel** que solicitan contar con **servicio de teléfono público o semipúblico**. Coursamos traslados a la empresa Telefónica de Argentina S.A.- nivel central-, pues las áreas locales indicaron la inexistencia de aparatos. Invocamos la importancia de asegurar a los internos la comunicación con sus familiares o letrados, por lo que solicitamos a la prestadora especial atención al pedido.

Otra actuación en trámite que merece ser mencionada, es la promovida por la madre de un menor que estuvo transitoriamente alojado en la **Comisaría III de Gral.Roca** y que denunciaba distintos hechos de irrespeto a los derechos del detenido y sus familiares. Dictamos la **Resolución N° 1.439/03**¹, donde resaltábamos nuestro desconcierto ante el pedido de la denunciante de que su hijo sea trasladado a la Alcaidía, donde resultaban ser mejores las condiciones de alojamiento.

Asistencia a Presos, Liberados y familiares

Se han recepcionado durante este período 15 solicitudes de distinto tipo de ayuda para personas detenidas o sus familias, a saber: pasajes, ropa, alimentos, trabajo cuando recuperan la libertad, etc..

Dimos intervención entonces, al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, en función de su competencia legal específica. Las respuestas del organismo han sido suficientes, a pesar de advertirse que tiene importantes limitaciones presupuestarias para poder atender todas las demandas.

En el caso de un ex-convicto que reclamaba la aplicación de Ley N° 3.228, que establece que los organismos públicos provinciales deberán asignar un cupo no inferior al 5% de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena o haya sido liberado de las mismas, el Instituto informó haber realizado gestiones para dar curso a la solicitud de interesado, cuya conducta fue calificada irreprochable durante su detención.

También recurrimos a los municipios de ciudades donde residen las familias de los detenidos, desde cuyas áreas sociales se los asiste a través de los programas vigentes.

¹ Ver Resolución N° 1.439/03 en el Apéndice.

RESOLUCIÓN N° 1.439/03

Viedma, 07 de noviembre de 2003

VISTO: El Expediente N° 3517/03, caratulado “.....S/ Solicita el traslado de su hijo – actualmente detenido en la Comisaría III- a la Alcaidía de Gral. Roca” y,

CONSIDERANDO:

I

Que las presentes actuaciones se iniciaron oportunamente con el reclamo remitido vía postal por la madre de un menor detenido en la Comisaría III de Gral. Roca, quien denunciaba indignas condiciones de alojamiento del mismo y solicitaba que lo trasladaran a la Alcaidía de esa ciudad.

Concomitantemente la interesada se presentó personalmente en oportunidad de la comisión de servicios de la Defensora del Pueblo en Gral. Roca, el día 6 de octubre ppdo., ocasión en la que tomamos contacto telefónico con las autoridades de la Alcaidía de Gral. Roca, donde nos indicaron que estaban en conocimiento del pedido de la señora y que en breve el detenido sería trasladado a esa Unidad, cuando lo dispusiera el Juez interviniente en los nuevos delitos que se le imputaban. Conforme surge del acta de fs. 5, tal traslado fue concretado días después.

II

Sin perjuicio de la superación de los motivos de la queja de la ciudadana del epígrafe, quien solicitaba el traslado a la Alcaidía de Gral. Roca de su hijo, corresponde continuar con la presente investigación, en protección de los intereses de otros detenidos alojados en la dependencia policial de referencia.

No desconocemos la grave emergencia penitenciaria de nuestra provincia y la Defensoría del Pueblo viene interviniendo en el control de la ejecución de la obra de construcción de la nueva alcaidía en Viedma, lo que se espera contribuirá a revertir el actual hacinamiento de nuestras unidades carcelarias.

Desde que asumieramos funciones en la Defensoría del Pueblo, hemos visitado en dos oportunidades la Alcaidía de Gral. Roca y sabemos cuánto se esfuerza el personal policial de la misma, y cuánto colaboran los propios internos, en sobrellevar la falta de espacio y el insuficiente presupuesto destinado a reparaciones urgentes o la compra de insumos. Es de público conocimiento que tal edificio, con capacidad para 180/200 personas, cuenta ya con una población que supera los 430 internos.

Resulta entonces llamativo que la ciudadana que promueve estas actuaciones prefiera que su hijo sea internado en esa Unidad, antes que permanecer en la Comisaría III,

pues en ésta las condiciones de alojamiento son aún más indignas. Permítasenos el desconcierto.

Efectivamente, en la presentación de fs.1, la denunciante manifestaba que en la Comisaría III de Gral. Roca:

- No le permitían a su hijo higienizarse.
- Estaba en un calabozo de 2 x2 mts., sin baño y sin luz.
- Tenía que rogar para que lo llevaran al baño.
- No le entregaban los elementos para higienizarse, ni los alimentos, provistos por la familia (algunos les fueron sustraídos).
- Los horarios de visita no se respetaban y los agentes los cambiaban arbitrariamente.
- Las visitas debían hacerlas frente a todo el personal de la comisaría, sin privacidad.

III

Que conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 2.756 y resultando cuestionada la actuación del personal policial afectado a la Comisaría III de Gral. Roca, corresponde correr traslado de la presente queja al Sr. Secretario de Estado de Seguridad y Justicia a fin de que se sirva investigar la presente denuncia e informe lo actuado en consecuencia, sin perjuicio de sugerir que arbitre todas las medidas urgentes que fueran necesarias para corregir las disfunciones que afecten los derechos de los detenidos.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO RESUELVE

PRIMERO: Avocarse a la investigación de la denuncia de fs.1/2 y correr traslado al Secretario de Estado de Seguridad y Justicia de la Provincia a los efectos indicados en el Considerando III de la presente (art.17 Ley 2756)

SEGUNDO: Regístrese, Notifíquese y Archívese.

